

## **SENTENCIA**

□ Santiago, veintisiete de octubre de dos mil veinte.

### **VISTOS; OÍDOS Y CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que comparece **CAROLINA YOLANDA CUMSILLE ATALA**, chilena, Técnico en Comercio Exterior, cédula nacional de identidad N° 12.089.894-9, domiciliada en Amalia Errazuriz N° 2960, Depto. 605, comuna de San Miguel, Santiago. Sostuvo en conformidad a lo dispuesto en los artículos 162, 168, 446 y demás disposiciones pertinentes del Código del Trabajo, y encontrándose dentro de plazo legal, vino en deducir demanda en Procedimiento Ordinario de Aplicación General Laboral por Declaración de Relación Laboral, Despido Injustificado, Nulidad del Despido y Cobro de Prestaciones Laborales Adeudadas, en contra de su ex empleador, la Ilustre Municipalidad de Huechuraba, Rol Único Tributario N° 69.255.400-0, representado en virtud del artículo 4° del Código del Trabajo por don Carlos Cuadrado Prats, ambos domiciliados para estos efectos en Premio Nobel N° 5555, comuna de Huechuraba, Santiago.

□ Señala que comenzó a prestar servicios bajo subordinación y dependencia en favor de la demandada a partir del 1 de agosto del año 2016, hasta el momento del despido injustificado el día 30 de agosto del 2019. Agrega que durante el tiempo que desempeñó sus servicios para la Ilustre Municipalidad de Huechuraba (en adelante “Municipalidad”), trabajó realizando labores de Labores de Apoyo Administrativo y Registro de Prestadores de Servicio, a contar del 1 de agosto del año 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016, en la Dirección de Desarrollo Comunitario “DIDECO”, además como Apoyo en Bodega Municipal y Seguimiento de Órdenes de Compra a contar del 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017 en el Departamento de Adquisiciones dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas y como Apoyo Técnico de Conciliaciones Bancarias y Coordinación de Documentos en el Departamento de Administración y Finanzas desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018, y como Apoyo Técnico en Oficina de Remuneraciones en el Departamento de Administración y Finanzas desde el 1 de abril de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018 y como Apoyo en el Proceso de Administración y Gestión de Recursos Humanos además de realizar todas aquellas tareas que le sean encomendadas por la Dirección en la Dirección de Desarrollo Comunitario “DIDECO” a contar del 1 de enero de 2019 hasta el 30 de agosto de 2019, mediante múltiples contratos de



RTGNRVTTWF

honorarios, pero que en realidad eran contratos de trabajo. Indica que durante todo este período desempeñó un cargo evidentemente estable, permanente e indispensable en la organización jerárquica de la Municipalidad. Fue sujeta a jornadas de trabajo claramente establecidas, al poder de mando de sus superiores y, a su vez, al deber de obediencia en el desempeño de sus funciones.

Expuso que el día 30 de agosto de 2019, la Municipalidad la despidió de manera irregular y faltando a todo requisito legal. En efecto, no señaló con exactitud y claridad los hechos ni las causales por el cual dio término a la relación laboral; no indicó ninguna causal legal de las contenidas en el Código del Trabajo, infringiendo flagrantemente el artículo 162 inciso primero del citado cuerpo legal; tampoco acreditó los pagos previsionales de todo el período de la relación laboral; entre otras irregularidades. Agrega que recibió una notificación de la demandada de que cesaba en sus funciones a contar del 30 de agosto de 2019, es decir sus servicios finalizarían el 30 de agosto de 2019, produciéndose la separación efectiva ese mismo día, sin expresar la causa, sin dar cuenta del estado de cotizaciones previsionales, entre otras omisiones. De igual forma, indica que durante todo momento trabajó en las dependencias de la Municipalidad y lugares que, designados por sus superiores, debía ejercer su labor. Ejecutando sus labores de manera continua y extensiva, durante un largo período. Oponiéndose en definitiva a la idea que establece la contratación a honorarios, pues esta supone necesariamente la libertad en cuanto a la prestación de los servicios pactados.

Indica que si bien en la práctica se emitieron boletas electrónicas de honorarios a nombre de la Municipalidad, por el hecho de existir en papel un contrato de honorarios, este pago lo habría recibido directamente del departamento de Remuneraciones de la Institución, por montos similares y de forma mensual durante toda la vigencia de la relación laboral, adoptando en la cotidianeidad la forma de una remuneración encubierta en un pseudo y peculiar “honorario”, el cual se pagaba previa confección, visación y aprobación de un Informe Trimestral y Final de Gestión, Agrega que su remuneración alcanzaba el monto de: \$828.000 pesos líquidos.

Indica como peticiones concretas, que en definitiva entre las partes:



1. ☐ Existencia de relación laboral: En virtud de la calificación jurídica de la relación laboral expuesta precedentemente entre las partes, solicita se declare que entre el demandado y la demandante existió relación laboral entre el día 1 de agosto de 2016 y 30 de agosto de 2019, bajo las características que se derivan de la definición de contrato de trabajo consignada en el artículo 7° del Código del Trabajo.

2. ☐ Continuidad de los servicios: En virtud de lo expuesto solicita se declare la continuidad de los servicios prestados por la demandante a favor de la Ilustre Municipalidad de Huechuraba desde el día 1 de agosto de 2016 hasta el 30 de agosto de 2019.

3. ☐ Indemnizaciones adeudadas: Con motivo del despido ilegal y arbitrario del que ha sido víctima, la demandada le adeuda los siguientes conceptos que señalo:

1) ☐ En virtud del inciso 4° del artículo 162 del Código del Trabajo, la sustitutiva de aviso previo por la siguiente cantidad: \$828.000.- pesos líquido.

2) ☐ En virtud del inciso 2° del artículo 163 del Código del Trabajo, la indemnización por años de servicios correspondientes a 3 años, por \$2.484.000.- pesos, considerando que durante 3 años y 1 mes realizó servicios ininterrumpidos en favor de la demandada.

3) ☐ En virtud de la letra b) del artículo 168 del Código del Trabajo, el recargo del 50% de las indemnizaciones por años de servicio ascendentes a \$1.242.000.- pesos.

4. ☐ Feriado legal y proporcional: Por estos conceptos la demandada le adeuda a su mandante la siguiente partida correspondiente a los feriados legales y proporcionales devengados:

1) ☐ Feriado legal: \$1.738.800.- pesos, equivalente a 63 días.

2) ☐ Feriado proporcional: \$55.200.- pesos, equivalente a 2 días.



RTGNRVTTWF

5. ☐ Otras prestaciones. A las sumas por indemnizaciones, sus recargos y feriado legal detalladas precedentemente, cabe agregar las que provienen de:

1) ☐ Cotizaciones impagas durante todo el periodo que duró la relación laboral, según liquidación que practique el Tribunal.

2) ☐ Las que se deriven de la aplicación de los incisos 5° y 7° del artículo 162 del Código del Trabajo, denominada “Ley Bustos”, según liquidación a practicar.

Termina solicitando al tribunal en mérito de lo expuesto, normas legales citadas y lo dispuesto en los artículos 162, 168, 446, y demás pertinentes del Código del Trabajo, tener por interpuesta demanda en Procedimiento Ordinario de Aplicación General Laboral por Declaración de Relación Laboral, Despido Injustificado, Nulidad del Despido y Cobro de Prestaciones Laborales Adeudadas en contra de la Ilustre Municipalidad de Huechuraba representada por don Carlos Cuadrado Prats, ambos ya individualizados, con domicilio en Premio Nobel N° 5555, comuna de Huechuraba, Santiago, para que a efecto el tribunal declare la existencia de Relación Laboral entre las partes, el Despido Injustificado, la Nulidad del despido y que, por ende, declare se le adeudan las prestaciones indicadas precedentemente, condenando al demandado a que le cancele las sumas señaladas en el cuerpo de este escrito, todo lo anterior con los reajustes e intereses que por ley corresponda en conjunto con las costas de la causa.

**SEGUNDO:** Que comparece CARLOS CUADRADO PRATS, periodista, cédula nacional de identidad N°7.949.081-4, Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Huechuraba, en representación de **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA**, persona jurídica de derecho público del giro de su denominación, R.U.T N°69.255.400-0, ambos con domicilio para estos efectos Avenida Recoleta N°5680, Comuna de Huechuraba, Santiago, quien indica que encontrándose dentro de plazo y en conformidad a lo dispuesto en el artículo 452 del Código del Trabajo, vino en oponer excepción de incompetencia a la demanda interpuesta en contra de su representada, por doña CAROLINA YOLANDA CUMSILLE ATALA, señala que niega todas y cada una de los argumentos señalados por la actora tendientes a fundamentar una supuesta relación laboral, una supuesta nulidad del despido, un supuesto despido sin causa legal y supuestas deudas de prestaciones e indemnizaciones legales, ya que el



RTGNRVTTWF

régimen de la demandante fue siempre un régimen de prestación de servicios a honorarios sujeto a las normas civiles respectivas. Agrega que esta demandada está regida por disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias como lo son Constitución Política de la Republica, siendo regida principalmente tanto en su organización como en su funcionamiento por la ley 18.695 Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades que establece los lineamientos principales en el ámbito de la contratación de personal, además en lo pertinente por la ley 18.575, sobre Bases Generales de Administración del Estado y por el estatuto administrativo para Funcionarios Municipales ley 18.883, norma esta última que señala en sus artículos 1°, 2°, 3° y 4°, las formas como una persona puede prestar servicios para una municipalidad. Precisamente, la Ley N°18.883 habilita a las municipalidades a contratar a personas bajo la modalidad de contrato de trabajo, pero sólo en los casos de actividades que se efectúen en forma transitoria en balnearios u otros sectores turísticos o de recreación o en servicios públicos traspasados. Así, en los demás casos, dicha habilitación legal no existe, por lo que si esta municipalidad lo llevara a cabo, vulneraría lo dispuesto en el artículo 7° de la Constitución Política de la República, norma que contiene un principio de legalidad esencial de nuestro ordenamiento jurídico y que los órganos estatales están obligados a cumplir. A lo anterior se suma la propia identificación de la relación contractual que hace el artículo 4° ya citado, "Contratación Sobre La Base De Honorarios", lo que claramente no alude a un vínculo laboral, caracterizado por la existencia de una remuneración y una relación de subordinación o dependencia, elementos que no considera esta regulación específica para referirse a esta modalidad excepcional de prestación de servicios para las municipalidades. En este contexto, la única opción posible es entender como régimen jurídico aplicable subsidiario en estos casos, el establecido en el Código Civil, particularmente en las normas relativas al denominado "contrato de arrendamiento de servicios inmateriales" (artículos 2006 y siguientes), ya que éstas son las únicas que se avienen con la materia de que tratan estos contratos a honorarios y no de una relación laboral como falsamente lo pretende la contraria.

Sostuvo que el Programa Denominado "Gestión y Coordinación De Servicios Municipales", fue aprobado por decreto exento N°4182/2015, estableciendo el departamento al cual pertenece dicho programa, el programa, el objetivo general, objetivos específicos, beneficiarios, periodo de ejecución (Enero a Diciembre de 2016),



localización de la ejecución, Dirección Ejecutora, el financiamiento, y su vigencia. Firmando la demandante, un contrato de prestación de servicios a honorarios con fecha 01 de Agosto de 2016, en el cual se señala el siguiente cometido específico: 1. Realizar labores para el apoyo administrativo de programas del departamento de atención social de la dirección de desarrollo comunitario, 2. Mantener registro actualizado de prestadores de servicios del departamento de atención social de la dirección de desarrollo comunitarios. El contrato tenía como vigencia desde el 1° de Agosto hasta el 31 de Diciembre de 2016 y fue aprobado por decreto exento N°01/1259/2016 de fecha 31 de Agosto de 2016. Posterior a ello el Programa Denominado "Gestión y Coordinación De Servicios Municipales 2017", fue aprobado por decreto exento N°01/3674/2016, estableciendo el departamento al cual pertenece dicho programa, el programa, el objetivo general, objetivos específicos, beneficiarios, periodo de ejecución (Enero a Diciembre de 2017), localización de la ejecución, unidad Ejecutora y responsable, el financiamiento, y su vigencia. Firmando la demandante, un contrato de prestación de servicios a honorarios con fecha 30 de Diciembre de 2016, señalando el cometido específico según señala el contrato. Este contrato tenía como vigencia desde el 1° de Enero hasta el 30 de Junio de 2017 y fue aprobado por decreto N°01/2051/2016 de fecha 30 de Diciembre de 2016. Firmando posteriormente una modificación de contrato de prestación de servicios a honorarios con fecha 23 de junio de 2017 y que fue aprobado por decreto N°01/1104/2017 de fecha 25 de Julio de 2017, con el mismo cometido específico señalado anteriormente, con una vigencia del 1 de julio al 31 de Diciembre de 2017.

En este mismo tenor, indica que Contratos De Prestación De Servicios A Suma Alzada", con fecha 5 de Diciembre 2017 la demandante firmo un contrato de prestación de servicios a suma alzada aprobado mediante decreto 01/2061/2017 de fecha 18 de Diciembre de 2017, con una vigencia desde el 1° de enero al 31 de diciembre de 2018, con los siguientes cometidos específicos: 1.- Apoyo técnico en la revisión, análisis y mantenimiento organizado de las conciliaciones bancarias de la Municipalidad de Huechuraba, 2.- Coordinar y registrar el ingreso de documentación desde la Dirección de Administración y Finanzas y sus departamentos, relativas a materias de conciliaciones bancarias. Con fecha 29 de diciembre 2017 la demandante suscribe modificación de dicho contrato, relativo a la emisión de un informe trimestral, que fue aprobado por decreto 01/148/2018 de fecha 14 de febrero de 2018. Dicha contratación



RTGNRVTTWF

termino a contar del 1° de abril de 2018, por renuncia voluntaria lo que fue sancionado por decreto 01/1116/2018 de fecha 15 de mayo de 2018. Consiguientemente, en otro programa Denominado "Gestión Centralizada De Prestadores De Servicios Para El Cumplimiento De Los Objetivos Anuales Del Ámbito Social Municipal", fue aprobado por decreto exento N°01/3594/2017, estableciendo el departamento al cual pertenece dicho programa, el programa, el objetivo general, objetivos específicos, beneficiarios, periodo de ejecución (Enero a Diciembre de 2018), localización de la ejecución, unidad Ejecutora y responsable, el financiamiento, y su vigencia. Firmando la demandante, un contrato de prestación de servicios a honorarios con fecha 29 de Diciembre de 2018, señalando los cometidos específico según señala el contrato que se acompañara en autos. Este contrato tenía como vigencia desde el 1° de Abril hasta el 31 de Diciembre de 2018 y fue aprobado por decreto N°01/1088/2018 de fecha 9 de Mayo de 2018.

Indica luego que el, Programa Denominado "Gestión Centralizada De Prestadores De Servicios Para El Cumplimiento De Los Objetivos Anuales Del Ámbito Social Municipal", fue aprobado por decreto exento N°01/3620/2018, estableciendo el departamento al cual pertenece dicho programa, el programa, el objetivo general, objetivos específicos, beneficiarios, periodo de ejecución (Enero a Diciembre de 2019), localización de la ejecución, unidad Ejecutora y responsable, el financiamiento, y su vigencia. Firmando la demandante, un contrato de prestación de servicios a honorarios con fecha 31 de Diciembre de 2018, señalando los cometidos específico según señala el contrato respectivo que se acompañara en autos. Este contrato tenía como vigencia desde el 1° de Enero hasta el 30 de Junio de 2019 y fue aprobado por decreto N°01/2740/2018 de fecha 31 de Diciembre de 2018. Firmando posteriormente un nuevo contrato de prestación de servicios a honorarios con fecha 28 de junio de 2019 y que fue aprobado por decreto N°01/1602/2019 de fecha 11 de Julio de 2019, con el mismo cometido específico señalado anteriormente, con una vigencia del 1 de julio al 31 de Agosto de 2019. Agrega que en conformidad con lo señalado en la modificación del contrato de prestación de servicios a honorarios de fecha 28 de Junio de 2019, que señalaba que su prestación de servicios tenía una vigencia hasta el 31 de Agosto de 2019, precisamente esta termino en la fecha acordada, y no el 30 de agosto como lo señala la demandante, de manera tal que no existía obligación alguna con la finalidad de avisarle del término de la misma ya que se trataba de una prestación de servicios a honorarios regida por la normativa que ya se ha dicho, en la cual la demandante tenia



RTGNRVTTWF

perfecto conocimiento de la vigencia del mismo desde el momento en que suscribió el contrato respectivo, de manera tal que no puede ahora alegar que no tenía conocimiento. Como se señaló de la propia naturaleza de los cometidos encargado a la demandante, se concluye que para cumplir con estos cometidos no era necesario que se le instruyeran ordenes, y la existencia de a de director o coordinadores, obedece a una obligación de esta parte para que los programas funcionaran de forma adecuada, y coordinar la ejecución del cometido, conforme se requiere para el caso de la ejecución de programas y el gasto de fondos públicos en este y por cierto a las normas de fiscalización por parte de la Contraloría General de la Republica a las cuales estamos expuestos por los recursos que se invierten en estos programas, y no para dar instrucciones a la demandante, la supuesta jefatura que señala no fue tal, sino solo una coordinación del programa, ni menos se le emitía instrucciones en los términos como lo pretende configurar, el cometido señalado en sus contratos de honorarios fueron los que realizo y ninguna otra función bajo subordinación y dependencia, prestación de servicios a honorarios del cual tenía cabal conocimiento y que ambas partes estimaban de buena fe que era así, lo que se demuestra con lo expresamente reconocido por la demandante al firmar cada uno de los referidos contratos, es decir tenía plena conciencia que se trataba de una prestación de servicios inmateriales regida por su contrato y por las normas del Código Civil aplicable en forma subsidiaria. En efecto, como se puede apreciar de los contratos firmados por la actora, y de los informes mensuales y/o trimestrales y finales que emitió (en los periodos correspondientes) para el pago de sus honorarios, se concluye que para el cumplimiento de tales cometidos, no se requerían instrucciones ni órdenes para su ejecución, dada la calidad de sus funciones, y la supuesta jefatura directa que señala no existe ni existió, pues la supervisión del programa no era para tales efectos, si no que para establecer y fiscalizar el cumplimiento del marco general de los programas a través de los cuales cumplía con sus cometidos. En este mismo tenor, indica que la demandante percibía por la prestación de sus cometidos una suma por concepto de honorarios, previo informe mensual, trimestral y/o final (según el periodo de contratación) y emisión de la boleta respectiva descontándose el 10% de impuestos respectivo, y no recibió jamás un remuneración como lo pretende.

En efecto, según reza el último contrato a honorario suscrito con la demandante, los honorarios pactados fueron ascendentes a la suma de \$686.750.- pesos, monto bruto, a los cuales se realizaba la deducción del 10% por concepto de impuesto a la renta,



RTGNRVTTWF



pagándose previo informe de cometidos y visación de la correspondiente boleta de honorarios de los servicios prestados, imputándose estos a la cuenta 215.21.04.004 denominada Prestaciones de Servicio en Programas Comunitarios. De manera tal que los honorarios que recibía, producto de su prestación de servicios era la antes señalada y no recibía una remuneración como falsamente lo señala.

Termina señalando que:

1. ☐ Sobre la solicitud del demandante tendiente a que se declare por el tribunal la existencia de una relación laboral, rechazo su absoluta procedencia conforme lo expuesto en esta contestación.

2. ☐ Sobre la solicitud de declarar una supuesta continuidad de servicios, rechazo su absoluta procedencia conforme lo expuesto en esta contestación.

3. ☐ Sobre la solicitud de declarar que el supuesto despido fue sin causa legal rechazo su absoluta procedencia conforme lo expuesto en esta contestación.

4. ☐ Sobre la solicitud de condenar a esta demandada a pagar Indemnización sustitutiva del aviso previo, rechazo su absoluta procedencia conforme lo expuesto en esta contestación.

5. ☐ Sobre la solicitud de condenar a esta demandada a pagar Indemnización por años de servicio y fracción superior a 6 meses, rechazo su absoluta procedencia conforme lo expuesto en esta contestación.

6. ☐ Sobre la solicitud de condenar a esta demandada a pagar el incremento del 50% conforme al artículo 168 del Código del Trabajo, rechazo su absoluta procedencia conforme lo expuesto en esta contestación.

7. ☐ Sobre la solicitud de condenar a esta demandada a pagar feriado legal y proporcional, rechaza su absoluta procedencia conforme lo expuesto en esta contestación, y en subsidio y para el caso del feriado legal demandado y para el caso que se declare la existencia de una relación laboral, solicita que se declare que su pago



se hace improcedente puesto que no señala los períodos que pretende le sean pagados, y no obstante no señalar las fechas de dichos períodos opone en este acto la **EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN** contemplada en el artículo 510 del Código del Trabajo, puesto que se encontrarían prescritas todas aquellas anteriores a 2 años contados desde la notificación de la demanda de autos.

8. ☐ Sobre la solicitud de condenar a esta demandada a pagar las remuneraciones y demás prestaciones por aplicación del artículo 162 inciso 5° y 7° del Código del Trabajo, rechaza su absoluta procedencia conforme lo expuesto en esta contestación.

9. ☐ Sobre la solicitud de condenar a esta demandada al pago de las cotizaciones previsionales impagas durante todo el periodo demandado, rechaza su absoluta procedencia conforme lo expuesto en esta contestación.

10. ☐ Sobre los reajustes, intereses y costas demandados, rechazo su absoluta procedencia conforme lo expuesto en esta contestación.

**TERCERO:** Que celebrada la audiencia preparatoria, las partes fueron llamadas a conciliación, la que no prosperó, procediendo el Tribunal a fijar los siguientes hechos controvertidos:

- 1) Naturaleza del vínculo jurídico entre las partes, efectividad de corresponder aquello a una relación laboral conforme lo dispuesto en el artículo 7 del Código del trabajo. En la afirmativa del hecho uno. Funciones desempeñadas, remuneración pactada y efectivamente percibida.
- 2) Fecha de término de los servicios, pormenores y circunstancias. En su caso, cumplimiento de formalidades legales. En la afirmativa del hecho 1.
- 3) Monto y días que se adeudarían por concepto de feriado legal y proporcional
- 4) Estado de cotizaciones de seguridad social de la demandante por el periodo agosto de 2016 a agosto de 2019.os:



RTG NRVTWF

**CUARTO:** Que celebrada la audiencia de juicio las partes rindieron las probanzas para acreditar sus pretensiones, así la parte demandada incorporó y rindió los siguientes medios probatorios:

**LA PARTE DEMANDANTE INCORPORÓ LOS SIGUIENTES MEDIOS DE PRUEBA:**

**Documental:**

- 1) 2 Credenciales pertenecientes la Ilustre Municipalidad de Huechuraba en adelante “Municipalidad”, a nombre de Carolina Cumsille Atala.
- 2) Comunicado de Término de contrato emitido por la Municipalidad para Carolina Cumsille Atala con fecha 30 de agosto de 2019.
- 3) 4 Contrato de Prestación de Servicios a honorarios, firmados entre la Municipalidad y Carolina Cumsille Atala, celebrado las fechas que a continuación se señalan:
  - a. Contrato de fecha 1 de agosto de 2016.
  - b. Contrato de fecha 5 de diciembre de 2017.
  - c. Contrato de fecha 29 de marzo de 2018.
  - d. Contrato de fecha 29 de junio de 2019.
- 4) Modificación al Contrato de Prestación de Servicios, firmados entre Carolina Cumsille Atala y la Municipalidad celebrado con fecha 23 de junio de 2017.
- 5) Certificado N° 224/2019 emitido por Doris Durán Bustamante, Directora de Gestión de las Personas para Carolina Cumsille Atala.
- 6) Ordinario N°671 2018 de fecha 9 de noviembre de 2018 de la Municipalidad.
- 7) Documento ref.: N° de ingreso 1152 de fecha 9 de noviembre emitido por Verónica Córdoba Chavarria.
- 8) Listado de Prestadores de Servicio de la Municipalidad suscrito por Carolina Cumsille Atala.
- 9) Set de documentos denominados “Salida de Mercadería” de la Municipalidad en el detalle que a continuación se señala:



RTGNRVTTWF

a. Nro.: 00000922 Año: 2019.

b. Nro.: 00000114 Año: 2019.

c. Nro.: 00000817 Año: 2019.

d. Nro.: 00000848 Año: 2019.

e. Nro.: 00000222 Año: 2019.

10) Certificado de Acreditación de Participación en Curso, emitido por Verónica Orrego Ahumada, Secretaria General para Carolina Cumsille Atala, con fecha 19 de octubre de 2018.

11) Set de Informes Trimestral Honorarios realizados por Carolina Cumsille Atala para la Municipalidad correspondiente a los periodos que a continuación se señalan:

a. Enero a marzo, inclusive de 2019.

b. 2 informes de Julio y agosto de 2019.

12) Correo electrónico Enviado por Karina Fernanda Oviedo Avendaño para Carolina Cumsille Atala con fecha 13 de agosto de 2019, asunto: Solicitud boletas mes de agosto de 2019.

13) Serie de Boletas de Honorarios emitidas por Carolina Cumsille Atala para la Municipalidad, correspondientes a los siguientes períodos:

a. Agosto a diciembre, inclusive de 2016.

b. Enero a diciembre, inclusive de 2017.

c. Enero a diciembre, inclusive de 2018.

d. Enero a agosto, inclusive de 2019.

El Tribunal tiene por incorporada la prueba documental de la parte demandante y decreta su custodia.

**Testimonial:** Consta íntegramente en registro de audio

1) Angélica Romina Ceballos Muñoz, cédula de identidad N°15.776.151-k,



2) Valeria Angélica Céspedes Pulquillanca, cédula de identidad N°18.093.316-6, domiciliada en las Encinas N° 5657, comuna de Huechuraba, ciudad Santiago.

**Exhibición de documentos:**

**La parte demandada exhibe a la demandante los siguientes documentos solicitados en la audiencia preparatoria:**

- 1) Set de Informes Trimestrales y Finales a Honorarios realizados por Carolina Cumsille Atala para la Municipalidad, correspondiente al periodo comprendido desde el 1 de agosto de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2018.
- 2) Contrato de prestación de servicios suscrito entre las partes y con vigencia desde el 1 de enero de 2019 hasta el 30 de junio de 2019.

**LA PARTE DEMANDADA INCORPORÓ LOS SIGUIENTES MEDIOS DE PRUEBA:**

**Documental:**

- 1) decreto exento N°4182/2015, que aprueba PROGRAMA DENOMINADO “GESTION Y COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES”.
- 2) Contrato de prestación de servicios a honorarios de fecha 01 de Agosto de 2016 y decreto exento N°01/1259/2016 de fecha 31 de Agosto de 2016 que aprueba dicha contratación.
- 3) Decreto exento N°01/3674/2016, que aprueba el PROGRAMA DENOMINADO “GESTION Y COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES 2017”.
- 4) Contrato de prestación de servicios a honorarios de fecha 30 de Diciembre de 2016, y decreto aprobatorio N°01/2051/2016 de fecha 30 de Diciembre de 2016.
- 5) Modificación de contrato de prestación de servicios a honorarios de fecha 23 de junio de 2017 y decreto aprobatorio N°01/1104/2017 de fecha 25 de Julio de 2017.
- 6) Contrato de prestación de servicios de fecha 5 de Diciembre 2017 y decreto aprobatorio N°01/2061/2017 de fecha 18 de Diciembre de 2017.



RTGNRVTTWF

7) Modificación de contrato de prestación de servicios a honorarios DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2017, y decreto aprobatorio N°01/148/2018 de fecha 14 de febrero de 2018.

8) Decreto 01/1116/2018 de fecha 15 de mayo de 2018, que aprueba renuncia voluntaria de la demandante a contar del 1° de abril del año 2018.

9) decreto exento N°01/3594/2017, que aprueba PROGRAMA DENOMINADO “GESTION CENTRALIZADA DE PRESTADORES DE SERVICIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ANUALES DEL AMBITO SOCIAL MUNICIPAL”.

10) Contrato de prestación de servicios a honorarios de fecha 29 de Diciembre de 2018 y decreto aprobatorio N°01/1088/2018 de fecha 9 de Mayo de 2018.

11) Decreto exento N°01/3620/2018, que aprueba el PROGRAMA DENOMINADO “GESTION CENTRALIZADA DE PRESTADORES DE SERVICIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ANUALES DEL AMBITO SOCIAL MUNICIPAL”.

12) Contrato de prestación de servicios a honorarios de fecha 31 de Diciembre de 2018, y decreto aprobatorio N°01/2740/2018 de fecha 31 de Diciembre de 2018.

13) Contrato de prestación de servicios a honorarios de fecha 28 de junio de 2019 y decreto aprobatorio N°01/1602/2019 de fecha 11 de Julio de 2019.

14) Estados de pagos de los honorarios de la demandante de agosto a Diciembre 2016, y enero a diciembre de 2017, Enero a diciembre de 2018 y enero a agosto de 2019, señalando que cada estado de pago contiene la siguiente información (que por ser una gran cantidad no se detallan en particular).

a. Decretos de pagos Municipal.

b. Boletas de honorarios electrónica.

c. Certificados de cumplimiento.

d. Informes de cometidos mensuales, trimestrales y/o finales según el caso.



RTGNRVTTWF

El Tribunal tiene por incorporada la prueba documental de la parte demandada y decreta su custodia.

**Confesional:** Doña Carolina Yolanda Cumsille Atala (Consta íntegramente en registro de audio)

**QUINTO:** Que la principal controversia del caso de marras dice relación con dilucidar en qué calidad jurídica se encuentra contratada la demandante de autos, si esta nace en los términos que señala el artículo 7° del Código del Trabajo, o bien, si la actora fue contratada sobre la base de contrato a honorario en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley N°18.883.

Que por un lado la demandante indica que se encontraría contratada según el artículo 7° del Código del ramo, el cual indica *“Contrato individual de trabajo es una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, éste a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero, y aquél a pagar por estos servicios una remuneración determinada.”*, es decir que su vínculo contractual presentaba los elementos idóneos de carácter laboral, tales como las subordinación y dependencia, prestación de carácter indefinido, cumplimiento de jornada laboral, supervigilancia.-

Por otra parte la demanda sustenta su teoría en razón de que el vínculo existente entre su representada y la actora nace por un vínculo regulado en el Estatuto Administrativo, tal y como lo señala el artículo 4° de la ley 18.883 dispone: *“Podrán contratarse sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la municipalidad; mediante decreto del alcalde. Del mismo modo se podrá contratar, sobre la base de honorarios, a extranjeros que posean título correspondiente a la especialidad que se requiera. Además, se podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación de servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales. Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto.”*



Que en este entendido es dable sostener, “que nuestro ordenamiento jurídico no existe una sola regulación o cuerpo normativo que regule al contrato laboral, sino que existen diversos estatutos cuya aplicación dependerá del tipo de sujeto que tenga la calidad de empleador. Así si el empleador es un particular, esto es un sujeto de derecho privado, es claro que el contrato laboral que materialice o acuerde con un trabajador estará sujeto a las normas contenidas en el Código del Trabajo, sin embargo cuando el empleador es el Estado y existe un estatuto o cuerpo legal especial que regule el vínculo laboral existente entre el sujeto de derecho público que interviene como empleador y un trabajador, el contrato laboral acordado por dichas partes se regulará por las normas contenidas en el respectivo estatuto especial, y sólo en las materias que expresamente no se regulen se aplicará el Código del Trabajo como norma general y supletoria, en la medida que su contenido no sea contrario a las normas contenidas en el estatuto especial” (Considerando Sexto, O-474-2018, del 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago)

□**SEXTO:** Que al momento de analizar la prueba incorporada en audiencia de juicio, en especial consideración, la prueba documental de la parte demandante N° 3, 4, 6, 10, 11,, 13 y prueba documental de la parte demandada N° 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tales documentos dan cuenta de diferentes contratos de prestación de servicios suscritos entre las partes, contratos que se circunscriben a diferentes proyectos realizados por la Municipalidad, para distintos fines.

□Que en este entendido, la Constitución Política de la República, reconoce a las Municipalidades como entidad pública, en el artículo 121 la facultad de crear o suprimir empleos y fijar remuneraciones para el cumplimiento de sus funciones, y dicha facultad debe ser ejercida dentro de los límites establecidos con el cumplimiento de requisitos que determine la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.-

□Que en razón de lo que establece la Ley 18.883 en sus artículos 2, 3 y 4 indica tipos de trabajadores municipales:

- a) Trabajador de planta es aquel que conforma la organización estable de la municipalidad y que desarrollan las funciones que le son propias a dicho organismo, distinguiendo el artículo 6 entre funcionarios “titulares, suplentes o subrogantes”.
- b) Trabajador a contrata son aquellos que desarrollan funciones propias de la municipalidad pero durante un periodo de tiempo determinado que no puede exceder al 31 de diciembre de cada año.





c) Trabajador a honorarios es aquel que presta servicios sobre la base de honorarios, es decir a cambio de un ingreso que está sujeto al impuesto de segunda categoría (artículo 42 de la Ley de la Renta) y que se caracteriza porque el usuario del servicio y quien paga por ellos, en este caso la municipalidad, debe retener un 10% de los honorarios pactados por concepto de impuesto a la renta para luego enterarlo en arcas fiscales.

d) Trabajador sujeto al Código del Trabajo que corresponderá al que desarrolla actividades transitorias en municipalidades que cuenten con balnearios u otros sectores turísticos o de recreación, o bien que haya laborado en servicios traspasados desde organismos o entidades del sector público que sean administrados directamente por la Municipalidad, como también los médicos cirujanos que se desempeñen en los gabinetes sicotécnicos en lo relativo a las remuneraciones, horario de trabajo e incompatibilidades.

**SEPTIMO:** Que atendido que los antecedentes aportados no hacen más que dar cuenta que entre las partes se pactaron sucesivos contratos de prestación de servicios a honorarios, tales como “PROGRAMA DENOMINADO “GESTION Y COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES”; PROGRAMA DENOMINADO “GESTION Y COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES 2017; PROGRAMA DENOMINADO “GESTION CENTRALIZADA DE PRESTADORES DE SERVICIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ANUALES DEL AMBITO SOCIAL MUNICIPAL”. Que todos estos nacen en razón de diferentes gestiones realizadas por la Municipalidad, las que se caracterizan por ser específicas, todo ello unido al hecho que la propia actora reconoce ver emitido boletas de honorarios como contrapartida a los emolumentos que percibía como contraprestación por dichos servicios contratados. Que en cuanto al hecho de haber contado con una credencial, ello no es indicio suficiente de laboralidad, ya que es de toda lógica entender, que el personal que se desempeña ante dicho servicio público, sea cual sea la naturaleza de la prestación deba encontrarse identificada al momento de ingresar a dependencias de la entidad, sobre todo si esta es de carácter publica, y el hecho de haber realizado un curso, no necesariamente indica la dependencia pretendida, es más a juicio de esta sentenciadora fortalece la especificidad de las funciones desempeñadas en sus funciones por lo que tales elementos no dan cuenta de subordinación o dependencia, y menos en la intensidad que se requiere para establecer una realidad distinta a la pactada.-

Que realizado este análisis es posible establecer que al haber sido contratada la actora dentro de los términos que autoriza el artículo 4 de la ley 18.883, se trata de un



funcionario público, respecto del cual no resultan aplicables las disposiciones del código del trabajo y en consecuencia los institutos cuya protección demanda, a saber, despido injustificado y nulidad del despido.

**OCTAVO:** Que este Tribunal ha razonado de igual manera en distintas sentencias pronunciadas con antelación, resultando sumamente ilustrativa aquella pronunciada en autos **RIT O-474-2018**, la que en lo pertinente indica: *“Que los derechos y obligaciones siempre tienen una fuente que les da origen, fuente que conforme lo dispuesto en el artículo 1437 del Código Civil puede consistir en un contrato, cuasicontrato, delito, cuasidelito, o la ley. En el caso del contrato, como fuente de obligaciones y derechos, se caracteriza por ser un acto jurídico bilateral en donde una parte se obliga para con otra a dar, hacer, o no hacer alguna cosa (artículo 1438 del Código Civil), distinguiéndose en la legislación diversos tipos de contratos, siendo uno de ellos el contrato de trabajo o contrato laboral, el que conforme lo dispuesto en el artículo 7 del Código del Trabajo, se caracteriza por la circunstancia de que una de las partes, denominada trabajador, asume una obligación de hacer, concretamente la de ejecutar servicios personales bajo subordinación y dependencia del usuario de los mismos, mientras que la otra parte que se beneficia de esos servicios, denominada empleador, asume la obligación de pagar por aquellos una remuneración determinada, de manera que toda prestación de servicios en dichos términos hace presumir la existencia de un contrato laboral, como lo dispone el artículo 8 del Código del Trabajo. Ahora, una de las clasificaciones que la doctrina aplica a los contratos es aquella que distingue entre contratos típicos y atípicos. Así don Jorge L pez Santa ó María en su obra “Los Contratos. Parte General” (1º Edición 1986, Editorial Jurídica de Chile) señala que “Se denomina contratos nominados o típicos a los que han sido expresamente reglamentados por el legislador en Códigos o en leyes especiales; e innominados o atípicos a los que no lo han sido” (página 97). En el caso del contrato de trabajo estamos frente a un contrato típico o nominado ya que se encuentra regulado por la ley, concretamente por el Código del Trabajo, conforme lo dispuesto por el inciso 1º del artículo 1 de dicho texto legal, norma que dispone que “Las relaciones laborales entre los empleadores y los trabajadores se regularán por este Código y pos sus leyes complementarias”, sin embargo las normas contenidas en el citado Código no son aplicables a todos los contratos laborales, ya que el inciso 2º del mencionado artículo dispone que “no se aplicarán, sin embargo, a los funcionarios*



de la Administración del Estado, centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, ni a los trabajadores de las empresas o instituciones del Estado o de aquellas en que éste tenga aportes, participación o representación, siempre que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por Ley a un estatuto especial”. Finalmente el inciso tercero del mismo artículo agrega que “Con todo, los trabajadores de las entidades señaladas en el inciso precedente se sujetarán a las normas de este Código en los aspectos o materias no regulados en sus respectivos estatutos, siempre que ellas no fueren contrarias a estos últimos”.

De la norma citada se determina que en nuestro ordenamiento jurídico no existe una sola regulación o cuerpo normativo que regule al contrato laboral, sino que existen diversos estatutos cuya aplicación dependerá del tipo de sujeto que tenga la calidad de empleador. Así si el empleador es un particular, esto es un sujeto de derecho privado, es claro que el contrato laboral que materialice o acuerde con un trabajador estará sujeto a las normas contenidas en el Código del Trabajo, sin embargo cuando el empleador es el Estado y existe un estatuto o cuerpo legal especial que regule el vínculo laboral existente entre el sujeto de derecho público que interviene como empleador y un trabajador, el contrato laboral acordado por dichas partes se regulará

por las normas contenidas en el respectivo estatuto especial, y sólo en las materias que expresamente no se regulen se aplicará el Código del Trabajo como norma general y supletoria, en la medida que su contenido no sea contrario a las normas contenidas en el estatuto especial. **SEPTIMO:** Que el demandante no controvierte la circunstancia de que su empleadora es una municipalidad. Al respecto se tendrá en cuenta que el artículo 110 de la Constitución Política dispone que para el gobierno y administración interior del Estado, el territorio de la República se dividirá en regiones y éstas en provincias, y que para los efectos de la administración local, las provincias se dividirán en comunas, y la administración local de cada comuna o agrupación de comunas residirá en una municipalidad (artículo 118 inciso 1º de la Constitución), la que es una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna (artículo 118 inciso 4º de la Constitución).

La municipalidad tiene como máxima autoridad al Alcalde, quien junto al Concejo ejerce las funciones y atribuciones que la ley establece para este tipo de organismo en conformidad a la ley, para lo cual necesariamente deberán contar con el personal



necesario, razón por la que el artículo 121 de la Constitución le reconoce la facultad de

crear o suprimir empleos y fijar remuneraciones para el cumplimiento de sus funciones, facultad que debe ser ejercida dentro de los límites y requisitos que determine la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

La mencionada ley corresponde a la Ley 18.695, la que en su artículo 40 dispone que el ingreso, deberes, derechos, responsabilidad administrativa y la cesación de funciones del personal de la municipalidad será regulado por un Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales, Estatuto que está contenido en la Ley 18.883, por lo que en principio el contrato de trabajo en el que la empleadora sea una Municipalidad no se regirá por las normas contenidas en el Código del Trabajo, sino que por las normas contenidas en el mencionado Estatuto, salvo en las materias no reguladas expresamente, en cuyo caso será aplicable el Código del Trabajo en la medida que sus normas no controviertan a su vez al Estatuto. **OCTAVO:** Que al revisar las normas contenidas en la Ley 18.883, se determina que quienes presten servicios personales bajo subordinación y dependencia de una Municipalidad y a cambio de una remuneración determinada, esto es los trabajadores municipales, pueden desarrollar dichos servicios de diferentes formas o maneras, distinguiéndose entre trabajadores de planta, a contrata, a honorarios y sujetos al Código del Trabajo. Se hace presente que la atribución de calidad de trabajador o funcionario a un prestador de servicios a honorarios en el ámbito de la administración pública ha sido reconocido por el profesor Jorge Bermúdez Soto, quien a propósito de los funcionarios de la administración centralizada del Estado sujetos al Estatuto Administrativo (Ley 18.834), ha sostenido en su obra “Derecho Administrativo General” (3º Edición, 2014, Editorial Legal Publishing) que respecto a la naturaleza jurídica del vínculo existente entre la Administración del Estado y el funcionario que “Dentro de las diversas formas de vinculación es posible encontrar funcionarios que conforman la planta del personal del servicio, funcionarios a contrata y servidores contratados a honorarios” (páginas 439 y 440). **DÉCIMO PRIMERO:** Que la decisión formal de la municipalidad por el cual se manifiesta su voluntad de contratar los servicios personales de una determinada persona, cualquiera sea la modalidad que se aplique, se materializa a través de un acto administrativo, conforme lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos (Ley 19.880), y respecto de dicho acto pueden darse dos hipótesis distintas, la primera es que el acto cumpla con los requisitos y



formalidades legales, y la segunda es que no cumpla con aquellas. En el caso de que una municipalidad contrate a una persona para que preste servicios a honorarios cumpliendo los requisitos legales, se entiende que el acto administrativo por medio del cual la municipalidad materializa dicho contrato es válido y producirá plenos efectos, y en cuanto a la regulación del vínculo laboral que surgirá entre la municipalidad y el prestador de servicios su regulación estará sujeta a las reglas contenidas en el mismo contrato, por expresa disposición del inciso final del artículo 4° de la Ley 18.883, no siendo aplicable el Código del Trabajo. **DÉCIMO SEGUNDO:** Que el inciso 8° del artículo 3 de la Ley 19.880 establece que los actos administrativos gozan de una presunción de legalidad, de imperio y de exigibilidad frente a sus destinatarios, desde su entrada en vigencia, autorizándose su ejecución de oficio por la autoridad administrativa, por lo que el acto administrativo por medio del cual una municipalidad contrata a una persona a honorarios se presumirá que es válido y cumple con los requisitos legales mientras no se diga lo contrario por el juez o por la propia administración.

En el presente caso en opinión del tribunal los contratos a honorarios acordados por las partes y que fueron allegados al proceso por ambos intervinientes, cumplen con la exigencia contenida en el inciso 2° del artículo 4 de la Ley 18.883, ya que el demandante ha sido contratado para cometidos específicos, por lo que los derechos que adquiere con ocasión de la prestación de sus servicios son sólo aquellos regulados en el mismo contrato, en los que se establece diversos derechos adicionales al pago del honorario pactado.

Atendido lo expuesto deberá desestimarse la demanda ya que todas las prestaciones demandadas no se encuentran expresamente reconocidas o reguladas en los contratos de honorarios suscritos por el demandante, sino que en el Código del Trabajo, texto legal que no resulta aplicable en este caso. **DÉCIMO TERCERO:** Que en el evento de no compartirse el razonamiento del tribunal y se considerara que la contratación a honorarios del demandante se ha materializado sin cumplir con los requisitos legales para contratar a una persona en tal calidad, dicho acto está viciado y podrá invalidarse por la misma administración, conforme lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 19.880, o bien se podrá pedir su nulidad al tribunal competente. En el caso de la nulidad declarada judicialmente debe precisarse que conforme al principio de legalidad el acto se entenderá nulo desde su emisión, carecerá de efecto, y los alcances de la sentencia son meramente declarativos. **DÉCIMO CUARTO:** Que se ha planteado



doctrinaria y jurisprudencialmente que cuando el contrato a honorarios acordado por una municipalidad es anulado por no cumplir los requisitos legales, los servicios desarrollados o ejecutados deberían quedar sujetos al Código del Trabajo. Esta solución o hipótesis se encuadra dentro de lo que la doctrina denomina “conversión del acto nulo”, que resulta aplicable cuando el “acto nulo o anulable contiene elementos constitutivos de otro acto distinto, y su consecuencia será la producción de los efectos de este último acto” (Jorge Bermúdez Soto en su obra ya citada *Derecho Administrativo General*, página 167), sin embargo en opinión del tribunal en este caso no es posible aplicar la conversión a un contrato laboral sujeto al Código del Trabajo porque es requisito esencial para que opere la conversión que el acto administrativo antijurídico sea reemplazado por uno que se encuentre conforme a derecho, y desde el momento en que la municipalidad no puede contratar personal sujeto al Código del Trabajo salvo en las hipótesis citados en el artículo 3 de la Ley 18.883 (las que no han sido invocados por el demandante), no resulta correcto o legal establecer que el contratado a honorarios en forma ilegal deba entenderse contratado por un contrato sujeto al Código del Trabajo simplemente porque la Municipalidad en ningún momento ha estado habilitada para contratar sus servicios sujeto a dicho estatuto legal y con los derechos y beneficios que en él se establecen. **DÉCIMO QUINTO:** Que la invalidación del contrato a honorarios ilegal materializado de oficio por la administración o su nulidad judicialmente declarada, en opinión del tribunal sólo produce la extinción de los efectos del acto jurídico sin afectar los derechos adquiridos por el destinatario del mismo que ha obrado de buena fe, en este caso el prestador de servicios a honorarios, quien tendrá derecho a exigir el cumplimiento de todos los créditos o derechos que se hayan incorporado en su patrimonio durante la ejecución del contrato conforme a las normas contenidas en la misma convención, pero en ningún caso ello significará el derecho a solicitar el pago de prestaciones regulados en el Código del Trabajo, hipótesis que sólo resulta aplicable cuando el empleador es un particular, ya que en ámbito del derecho privado el contrato a honorarios está limitado a la prestación de servicios que no se encuadran en el artículo 7º del Código del Trabajo, y cuando si se encuadran es obligatoriamente aplicable el Código del Trabajo atendido el carácter irrenunciable que tienen los derechos laborales.

**NOVENO:** Que en mérito de todo lo anteriormente expuesto forzoso resultará para esta sentenciadora rechazar la acción intentada en lo resolutive de la presente sentencia,



desestimando así la existencia de un vínculo contractual de aquel regulado en el Código del Trabajo entre las partes.

**DECIMO:** Que la prueba analizada lo ha sido conforme a las reglas de la sana crítica, de conformidad a lo establecido en el artículo 456 del Código del Trabajo y el restante material probatorio en nada altera lo anteriormente resuelto.

**UNDECIMO:** Que no se condenará en costas a la demandante por haber existido motivos plausibles para litigar.

□ Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 1, 2, 5, 7, 161, 162, 163, 168, 172, 415, 420, 423, 425 a 432, 434 a 438, 440 a 462 y 485 a 495 del Código del Trabajo; se resuelve:

- I. Que se **RECHAZA**, en todas sus partes, la acción interpuesta por Doña **CAROLINA YOLANDA CUMSILLE ATALA**, en contra de **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA**.
  - II. Que cada parte se hará cargo de sus costas.
- Regístrese y comuníquese.

**RIT O-7011-2019**

**RUC 19-4-0223991-6**

□

Pronunciada por doña **GERMAINE NICOLE PETIT-LAURENT ELICEIRY**, Juez Titular del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.



RTGNRVTTWF

A contar del 06 de septiembre de 2020, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>